

AUTO N. 01973

“POR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”

LA DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En uso de las facultades legales conferidas por la Ley 99 de 1993, con fundamento en la Ley 1333 de 2009, la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el Acuerdo Distrital 257 del 30 de noviembre de 2006, modificado parcialmente por el Acuerdo Distrital 546 de 2013, el Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009 modificado por el Decreto Distrital 175 del 04 de mayo de 2009 y en especial, las delegadas por la Resolución 01466 del 24 de mayo de 2018, modificada por la Resolución 02566 del 15 de agosto de 2018 de la Secretaría Distrital de Ambiente y,

CONSIDERANDO

I. ANTECEDENTES

Que el día 5 de septiembre del 2000, se recibió la queja radicada con el número 23828, en la cual se solicita verificar la contaminación auditiva generada por varios establecimientos de comercio, ubicados en la Avenida 1° de Mayo, entre carreras 61 A y 63 barrio Los Fundadores de esta ciudad.

Que, para atender la solicitud, se llevaron a cabo visitas técnicas los días 28,29 y 30 de septiembre del presente año a los inmuebles de la calle 28 sur No 62- 13/15/19 y al establecimiento comercial denominado "El Trapiche", ubicado en la Avenida 1° de mayo 62-02 sur, con el objeto de verificar la existencia de los hechos constitutivos de la denuncia.

Que con fundamento en estas diligencias se expidieron los Conceptos Técnicos números 13068A, 13069A y 13089, del 30 de noviembre del 2000, según los cuales la cuales el establecimiento visitado se encuentra situado en una zona de uso múltiple y está rigiendo la normatividad ambiental sobre contaminación auditiva, debido a que las actividades efectuadas revelaron que los niveles de presión sonora generados por las actividades y

equipos de sonido del establecimiento presentaron niveles promedio de 56.48 dB(A), 60.03 dB(A), 56.72 dB(A) y 74.11 dB(A), medidos, los tres primeros, desde los inmuebles afectados y el último desde la vía pública, los cuales sobrepasan los niveles máximos para zona residencial fijados por las normas que regulan la materia en 65 dB(A) para un horario diurno y 45 dB(A) para nocturno.

Que, mediante oficio del 5 de enero de 2001, el DAMA efectuó requerimiento a la señora Amparo Vargas, en calidad de propietaria y al señor Miguel Rengifo, identificado con cédula de ciudadanía N0 79.766.229 de Bogotá, en calidad de administrador del establecimiento comercial denominado “EL TRAPICHE”, ubicado en ubicado en la Avenida 1° de mayo 62-02 sur barrio los fundadores de esta ciudad.

Que posteriormente, el DAMA volvió a emitir requerimiento al propietario y/o representante legal del establecimiento EL TRAPICHE, para que a término perentorio de QUINCE (15) días calendario contados a partir del recibo del presente requerimiento tomara medidas necesarias con el fin de garantizar que los equipos instalados en la avenida 1° de Mayo No 62-02 sur, de esta ciudad, cumplan con la normativa ambiental en materia de contaminación auditiva.

II. FUNDAMENTOS LEGALES Y CONSTITUCIONALES

De acuerdo con lo establecido en el artículo 8° de la Constitución Política de Colombia es obligación, a cargo del Estado colombiano y de los particulares, proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

El régimen sancionador, encuentra fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución Política, que dispone la aplicación a toda clase de actuaciones administrativas, del debido proceso, en virtud del cual, *“Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”*, y el desarrollo de la función administrativa conforme a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Por su parte, el artículo 79 de la Carta Política consagra el derecho de las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad y la integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

A su vez, el artículo 80 de la misma Carta establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, para garantizar su desarrollo sostenible, así como su conservación, restauración o sustitución. También ordena que el Estado colombiano

deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales a que haya lugar y exigir la reparación de los daños causados.

En lo atinente a principios, la Ley 1437 de 2011 consagra en su artículo 3° que:

“(...) todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad (...).”

El principio de eficacia manifiesta que se deberá tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales con el fin de evitar decisiones inhibitorias.

Así mismo, el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo establece:

“Artículo 267. En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo”.

Al referirnos a la procedencia del archivo de un expediente y/o actuación administrativa, es preciso aclarar que el Código de Procedimiento Civil (Decreto 1400 de 1970), fue derogado por el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), el cual entró en vigor desde el primero de enero de 2016 (Acuerdo No. PSAA15-10392 del 1 de octubre de 2015 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).

En este orden de ideas, el artículo 122 del Código General del Proceso, formación y archivo de los expedientes establece que: *“El expediente de cada proceso concluido se archivará (...)”.*

III. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

Revisado el expediente se observa que se expidieron los Conceptos Técnicos números 13068A, 13069A y 13089, del 30 de noviembre del 2000, según los cuales el establecimiento visitado se encuentra situado en una zona de uso múltiple y está infringiendo la normatividad ambiental sobre contaminación auditiva, debido a que las actividades efectuadas revelaron que los niveles de presión sonora generados por las actividades y equipos de sonido del establecimiento presentaron niveles promedio de 56.48 dB(A), 60.03 dB(A), 56.72 dB(A) y 74.11 dB(A), medidos, los tres primeros, desde los inmuebles afectados y el último desde la vía pública, los cuales sobrepasan los niveles

máximos para zona residencial fijados por las normas que regulan la materia en 65 dB(A) para un horario diurno y 45 dB(A) para nocturno.

De acuerdo con lo anterior, mediante oficio del 5 de enero de 2001, el DAMA efectuó requerimiento a la señora Amparo Vargas, en calidad de propietaria y al señor Miguel Rengifo, identificado con cédula de ciudadanía N0 79.766.229 de Bogotá, en calidad de administrador del establecimiento comercial denominado “EL TRAPICHE”, ubicado en ubicado en la Avenida 1° de mayo 62-02 sur barrio los fundadores de esta ciudad.

Que posteriormente, el DAMA volvió a emitir requerimiento al propietario y/o representante legal del establecimiento EL TRAPICHE, para que a término perentorio de QUINCE (15) días calendario contados a partir del recibo del presente requerimiento tomara medidas necesarias con el fin de garantizar que los equipos instalados en la avenida 1° de Mayo No 62-02 sur, de esta ciudad, cumplan con la normativa ambiental en materia de contaminación auditiva.

Sin embargo, después de las actuaciones anteriormente mencionadas no se observa que el expediente haya tenido impulso a la fecha, para dar cumplimiento con los requerimientos respecto de los hechos mencionados y poder dar inicio formalmente a la actuación administrativa sancionatoria.

Es por ello y atendiendo al principio de eficacia procesal, se dispondrá el archivo documental de las diligencias contentivas en el expediente **SDA-08-2001-1586**.

IV. COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

Con relación a la competencia de esta Entidad, es preciso señalar que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 establece que las Corporaciones Autónomas Regionales ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente.

Posteriormente el numeral 6 del artículo 65 de la Ley 99 de 1993 prevé que corresponde en materia ambiental a los municipios, y a los distritos con régimen constitucional especial, además de las funciones que les sean delegadas por la ley o de las que deleguen o transfieran a los alcaldes por el Ministerio del Medio Ambiente o por las Corporaciones Autónomas Regionales, entre ellas ejercer a través del alcalde como primera autoridad de policía con el apoyo de la Policía Nacional y en Coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA), con sujeción a la distribución legal de competencias, funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en materia ambiental y de proteger el derecho constitucional a un ambiente sano.

El artículo 66 ibídem ordena que los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón de habitantes (1.000.000) ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano.

Mediante el Acuerdo Distrital 257 de 30 de noviembre de 2006 expedido por el Concejo de Bogotá, *“Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá Distrito Capital y se expiden otras disposiciones”*, se ordenó en el artículo 101, transformar el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente - DAMA, en la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, como un organismo del sector central, con autonomía administrativa y financiera.

Por su parte, el Decreto Distrital 109 de 16 de marzo de 2009 *“Por el cual se modifica la estructura de la Secretaría Distrital de Ambiente y se dictan otras disposiciones”* expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., modificado por el Decreto 175 del 4 de mayo de 2009, estableció la nueva estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Ambiente, determinó las funciones de sus dependencias y dictó otras disposiciones.

En lo relacionado al derecho sancionador ambiental, la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.417 del mismo día, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló en su artículo 1° que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través de las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 y demás autoridades ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.

En virtud del numeral 1° del artículo 1° de la Resolución 01466 del 24 de mayo de 2018, modificada por la Resolución 02566 del 15 de agosto de 2018 de la Secretaría Distrital de Ambiente, se delegó a la Dirección de Control Ambiental, entre otras, la siguiente función: *“8. Expedir los actos que ordenan el archivo, desglose, acumulación, ordenación cronológica y re-foliación de actuaciones administrativas en los procesos de carácter sancionatorio (...)”*

En mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO. - Ordenar el archivo documental del Expediente **SDA-08-2001-1586**, por las razones expuestas en la parte motiva de este Auto.

ARTÍCULO SEGUNDO: - Comunicar el presente acto administrativo a la señora **AMPARO VARGAS**, en calidad de propietaria del establecimiento comercial denominado "El Trapiche",

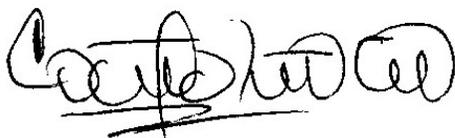
ubicado en la Avenida 1° de mayo 62-02 sur de esta ciudad, de conformidad con los artículos 66, 67, 68 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO TERCERO. - Comunicar el presente auto al Grupo Interno de Trabajo de Notificaciones y Expedientes (GITNE) de esta Entidad, para que proceda a efectuar el correspondiente archivo del expediente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo primero de este acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO. - Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de junio del año 2021



CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL

Elaboró:

ANDREA NATALIA ANTONIO
FERNANDEZ

C.C: 1018418019 T.P: N/A

CPS: CONTRATO
2021-1269 DE FECHA
2021 EJECUCION:

17/06/2021

Revisó:

GIOVANNA DEL CARMEN
FERNANDEZ ORJUELA

C.C: 52268579 T.P: N/A

CPS: CONTRATO
2021-1081 DE FECHA
2021 EJECUCION:

21/06/2021

Aprobó:

Firmó:

CAMILO ALEXANDER RINCON
ESCOBAR

C.C: 80016725 T.P: N/A

CPS: FUNCIONARIO FECHA
EJECUCION:

21/06/2021

Expediente: SDA-08-2001-1586